

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

DEMANDANTES	: LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ LAURENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS
DEMANDADOS	: PORVENIR S.A
LLAMADO EN GARANTIA	: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-002-2021-00188-01
RADICADO INTERNO	: 187-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 226

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado de consulta en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se declare que a los señores LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ, LAURENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS Y JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS, les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento del afiliado GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, en su calidad de cónyuge y padre respectivamente; en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, según lo consagrado en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, y en consecuencia se CONDENE a PORVENIR S.A., a que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes de manera retroactiva, es decir, a partir del día 29 de septiembre de 2005, fecha del fallecimiento del afiliado GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, incluyendo las mesadas adicionales y reajustes de ley, y se CONDENE a reconocer y pagar los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

Fundamenta sus pretensiones en que los señores GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE y LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ, convivieron bajo el mismo techo, de manera continua e ininterrumpida, compartiendo lecho y mesa durante 15 años aproximadamente, es decir **desde febrero de 1990 hasta el 29 de septiembre de 2005**, fecha del fallecimiento de aquel, y que de dicha relación procrearon a JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS y LARENT PAULINE ARTUNDUAGA, hijos legitimados y actualmente mayores de edad. Que el 29 de septiembre de 2005, falleció el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, por actuar violento de grupos al margen de la ley en el municipio de Barbosa, quien, durante su vida laboral, realizó aportes para el Sistema General de Pensiones y para el momento de su muerte se encontraba afiliado en HORIZONTE hoy PORVENIR S.A. Que con ocasión del fallecimiento del señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, los señores LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ, LARENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS Y JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS, en calidad de cónyuge e hijos, respectivamente, solicitaron ante PORVENIR el **11 de noviembre de 2020**, el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, y mediante comunicado del 24 de noviembre de 2020, la entidad niega la pensión toda vez que el causante no cumplió con la densidad de semanas exigidas por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, por cuanto el asegurado no había cotizado al Sistema General de Pensiones 50 semanas en los tres (3) años anteriores a la fecha del fallecimiento, indicando que la única prestación a la que tenía derecho es a la devolución de saldos. Que el 23 de diciembre de 2020 radicó ante la demandada solicitud de reconsideración a la negativa a reconocer la pensión de sobrevivientes, precisando que la prestación debía estudiarse en aplicación de la condición más beneficiosa bajo el régimen de la Ley 100 de 1993 en su versión original, pues al año inmediatamente anterior al momento del tránsito legislativo el causante contaba con 39 semanas cotizadas de las 26 requeridas y su deceso se originó dentro de los tres años siguientes a la entrada en vigor de la Ley 797 de 2003, y a pesar de ello la demandada nuevamente negó la pensión solicitada. Que según la historia laboral se desprende que el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, cotizó un total de 226 semanas, y teniendo en cuenta que el afiliado fallecido para el momento de su deceso acreditaba las 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al momento de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, la prestación debe resolverse de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 100 de 1993, aplicando la figura de la “condición más beneficiosa”.

RESPUESTA DE PORVENIR S.A

Esta entidad al dar respuesta acepta la fecha de fallecimiento del señor Artunduaga Bustamante, así como la filiación de los señores Larent Pauline y José Manuel Artunduaga Tapias con el afiliado fallecido, y que para la fecha del fallecimiento se encontraba afiliado a Horizonte S.A. sociedad absorbida por Porvenir S.A. desde enero de 2014, así mismo se aceptan las reclamaciones de pensión realizadas y las negativas realizadas a la misma. Frente a los demás hechos manifestó no ser ciertos y no constarle. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda, buena fe, prescripción, compensación, afectación de la sostenibilidad financiera, y la genérica.

Así mismo entidad entidad llamo en garantía a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., quien al ser notificada luego de haberse admitido el llamamiento en garantía respondió frente a la demanda que se opone a todas las pretensiones de la misma, que no le constan ninguno de los hechos y propuso como excepciones las de Inexistencia de obligación exigible a PORVENIR S.A., por incumplimiento de los requisitos de cotización establecidos por la Ley para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que se reclama a través de este proceso, improcedencia de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, falta de acreditación de los demandantes de su alegada calidad de beneficiarios para tener derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, prescripción, improcedencia del cobro de intereses moratorios y/o costas procesales.

Frente a los hechos relacionados con el llamamiento en garantía indicó que es cierto que BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, hoy PORVENIR S.A., suscribió con BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. la Póliza Previsional de Invalidez y Sobrevivientes, la cual fue renovada mediante Certificado No. 0 Anexo No. 165849 con vigencia del 1 de febrero de 2005 al 31 de enero de 2006, y que si bien es cierto que la Póliza de Seguro Previsional de Invalidez y Sobrevivencia se encontraba vigente para la fecha en que falleció el señor ARTUNDUAGA BUSTAMANTE, a saber, el 29 de septiembre de 2005, aclara que sólo en el evento en que se acredite en el proceso la realización del riesgo asegurado, surgirá la obligación indemnizatoria en cabeza de BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A, precisando que, sólo en el evento en que se acredite que el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMANTE

cumplió con los requisitos previstos por la ley vigente para el momento en que sobrevino su fallecimiento, y que las demandantes acreditan su condición de beneficiarios, se podrá exigir a la Aseguradora el traslado de la suma adicional necesaria para financiar la pensión de sobrevivientes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 08 de julio de 2022, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, ABSOLVIO a PORVENIR S.A. del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, e intereses de mora, pretendidos por LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ, LAURENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS Y JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS, y ABSOLVIO a la llamada en garantía BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. CONDENÓ en costas y agencias en derecho a los demandantes en favor de PORVENIR S.A., indicando que las mismas se liquidarán en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido en los arts. 365 y 366 del CGP y el acuerdo PSAA16-10554 del CSJ.

CONSULTA

El proceso llega a esta corporación en el grado jurisdiccional de consulta de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y ss

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. manifestó que la decisión proferida en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el pasado 8 de julio de 2022, está llamada a mantenerse incólume en esta instancia, por cuanto no existe obligación alguna a cargo de PORVENIR S.A., dado el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pues no cumplió con los requisito establecidos en la ley 797/03 respecto a las 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años antes del fallecimiento, y tampoco cumple con los requisitos para tener derecho a dicha prestación en virtud de la aplicación del principio de la condición mas beneficiosa, indicando por ultimo que se se llegare a considerar la procedencia del derecho se debe tener en cuenta la prescripción de mesadas de conformidad con lo establecido en los artículos 488 del C.S. No existe obligación alguna a cargo de PORVENIR S.A., dado el incumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y 151 del C.P.T, y que no

proceden los intereses moratorios, y que además no existe un riesgo amparado por la póliza de seguro previsional expedida por BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A, por cuanto el riesgo asumido por dicha entidad a través de la referida póliza, consistía en el pago de la suma adicional necesaria para financiar la pensión de sobrevivientes, siempre que se cumplieran los requisitos pactados dentro del contrato, esto es, (i) que el fallecimiento del afiliado ocurriera por riesgo común, (ii) dentro de la vigencia de la póliza y (iii) se reunieran las exigencias legales para acceder a la pensión. Por lo anterior solicita se confirme la sentencia de primera instancia.

El apoderado de Porvenir S.A con argumentos similares solicita se confirme la sentencia de primera instancia por cuanto no se cumplió con los requisitos de la ley 797/03 respecto a las 50 semanas cotizadas en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento, así como tampoco se cumple con los requisitos para aplicar el principio de la condición mas beneficiosa en este caso en particular.

CONSIDERACIONES

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar si el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMENTE, dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios tengan derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada en virtud de los requisitos exigidos por la norma vigente para el momento del fallecimiento, esto es, el artículo 46 de la ley 100/93 que existe 50 semanas cotizadas en los tres últimos años anteriores al fallecimiento, o si tienen derecho a la prestación en virtud de la aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Para el caso en concreto no existe discusión además que se encuentra probado que el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMENTE, falleció el 29 de septiembre de 2005, por lo que se presentaron a reclamar pensión de sobrevivientes la señora LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ en calidad de cónyuge y LAURENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS Y JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS como hijos del causante. (fls 25 a 32 de la demanda).

Con base en lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la normativa aplicable como presupuesto para acceder a la pensión de sobrevivientes.

En el presente caso, se tiene claro que la normatividad aplicable es el art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la L. 797 de 2003, por haber fallecido el señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMENTE, el 29 de septiembre de 2005; normatividad que señala:

“ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

(...)

*2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere **cotizado cincuenta semanas** dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.*

(...)

*Artículo 47: Son beneficiarios... a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y **haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte**; (...).”*

Partiendo de la normativa es claro que se deben tener cotizadas 50 semanas en los tres últimos años anteriores al fallecimiento para tener derecho a la pensión de sobrevivientes, requisito este que no se cumple dado que el señor, GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMENTE, cotizó un total de 179 semanas en toda su vida laboral, siendo la última cotización para el periodo de noviembre **30 del año 2000**, lo que indica que tenía “0” semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento. (fls 38 y ss de la contestación de Porvenir S.A).

Por lo anterior no cumple con el requisito establecido en el artículo 46 de la ley 100/93 en cuanto a las semanas cotizadas, por lo que deberá estudiarse si dicho requisito se cumple en aplicación del principio de la condición más beneficiosa según lo solicitado en la demanda.

2. Del requisito de semanas cotizadas en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Como para el caso bajo estudio según lo analizado el causante no dejó acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios al no tener las 50 semanas cotizadas en los últimos tres años anteriores a la

fecha del fallecimiento, según lo solicitado en la demanda deberá determinarse si es posible acudir a la norma inmediatamente anterior, esto es a la ley 100 de 1993 original a efectos de verificar si bajo el principio de la condición más beneficiosa se cumplen con los requisitos para tener derecho a la prestación.

En este orden de ideas, teniendo como pilar fundamental la aplicación de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 53 y 48 dispone el principio de la condición más beneficiosa, al igual que lo hace el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, debe aclararse cuál es el alcance por vía jurisprudencia que se le ha dado a dicho principio.

Por su parte, para aplicar el art. 46 de la Ley 100 de 1993 original, en virtud de la condición más beneficiosa, tenemos que el precepto en mención señala:

“Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.” (Negrilla fuera del texto)

Sin embargo, sobre la aplicación del principio de la condición más beneficiosa la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido implementando importantes cambios a partir del mes de enero del año 2017 y en tal sentido ha desarrollado una nutrida y consistente línea jurisprudencial de la cual a la fecha hacen parte más de 12 sentencias de casación y la primera la SL 4650 de 2017 y SL 2358 de 2017, las que han venido sido reiteradas, entre otras en la sentencia SL 765 de 2018, y la SL1341-2019, en la cual se estableció una temporalidad o límite para la aplicación de dicho principio previendo sus efectos jurídicos por un lapso determinado de tres años después de la vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, **hasta el 29 de enero de 2006**, lo que indica que para que a una persona se le pueda aplicar la Ley 100 de 1993, la muerte debe ocurrir en los tres años siguientes a la vigencia de la Ley 797 de 2003, sin posibilidad de aplicar normas anteriores a esta como el Decreto 758 de 1990.

El anterior criterio de temporalidad ha sido reiterado en sentencias posteriores tales como la SL 797 del 21 de febrero de 2018, Rad.50320; en la SL 4344 del

3 de octubre de 2018, rad. 59644; en la SL 514 del 19 de febrero de 2019, rad. 65336, en la SL 1887 del 10 de junio de 2020, rad. 82161, o más recientemente en la SL 5189 del 11 de noviembre de 2020, rad. 69161.

Esta misma posición de la Corte Suprema de Justicia, fue recogida por la sentencia de unificación SU 005 de 2018, en la que además de compartir el criterio de temporalidad antes mencionado, se dio la posibilidad de aplicar de forma ultractiva normas anteriores tales como el Decreto 758 de 1990 **u otros regímenes anteriores**, siempre y cuando se cumpla con el test de procedencia.

En este punto resulta necesario citar algunos apartes de la sentencia SL 4650 de 2017, con la finalidad de dar claridad respecto a la forma en que debe acreditarse el requisito de las 26 semanas exigidas por la ley 100/93.

“Recapitulando, se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:

3.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en cualquier tiempo, anterior al 29 de enero de 2003. c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. d) Que al momento del fallecimiento estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, antes del deceso.

3.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento.

4. Combinación permisible de las situaciones anteriores:

A todas estas, también hay que tener presente, para otorgar la pensión de invalidez bajo la égida de la condición más beneficiosa, la combinación de las hipótesis en precedencia, así:

4.1 Afiliado que se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció no estaba cotizando La situación jurídica concreta se explica porque el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, se encontraba cotizando al sistema y había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo. Si el mencionado afiliado, además, no estaba cotizando para la época del siniestro de la muerte - « hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe sobrevenir entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2006, pero tenía 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior al fallecimiento, es dable la aplicación del principio de la condición más beneficiosa. Acontece, sin embargo, que, de no verificarse este último supuesto, no aplica tal postulado.

Aunque suene repetitivo, es menester insistir en que si al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, el afiliado se encontraba cotizando al sistema y no le había aportado 26 semanas o más en cualquier tiempo, no goza de una situación jurídica concreta.

4.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo y cuando falleció estaba cotizando

Acá, la situación jurídica concreta nace si el afiliado al momento del cambio legislativo, vale decir, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema,

pero había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002. Ahora, si el aludido afiliado estaba cotizando al momento de la muerte - «hecho que hace exigible el acceso a la pensión»- que debe suceder entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, y tenía 26 semanas de cotización en el cualquier tiempo, igualmente se aplica el postulado de la condición más beneficiosa.

La Sala juzga pertinente advertir que, de no cumplirse este último supuesto, no se aplica dicho principio. En el mismo sentido que en el caso delantero, y aún a riesgo de fatigar, debe acentuarse que si el afiliado al momento del cambio legislativo, esto es, 29 de enero de 2003, no estaba cotizando al sistema y tampoco había aportado 26 o más semanas en el año inmediatamente anterior, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y 29 de enero de 2002, no existe una situación jurídica concreta”.

Acorde con dicha línea jurisprudencial, para el caso en concreto el caso del señor GUILLERMO JOHAN ARTUNDUAGA BUSTAMENTE, se enmarca dentro del supuesto 3.2, ya mencionado, esto es, respecto al afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo. En virtud de lo mencionada se tiene que, si bien el causante quien falleció dentro del limite temporal exigido por la jurisprudencia en comento, esto es, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006, al haber fallecido el 29 de septiembre de 2005, y que este aportó 26 semanas en el año que antecede la fecha del tránsito legislativo, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002, por cuanto tenía en dicho periodo 40 semanas cotizadas, lo cierto es que **no cumple con el requisito de tener cotizadas 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento** dado que su última cotización fue para el mes de noviembre de 2002.

En razón de lo expuesto, y dado que no se cumplen los presupuestos para la aplicabilidad del principio de la condición más beneficiosa en atención a lo establecido en la ley 100/93 original, ni de la ley 100/93 modificada por la ley 797/03 se debe CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, EN SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, pero por las razones argumentadas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTES	: LUDICELLY TAPIAS SANCHEZ LAURENT PAULINE ARTUNDUAGA TAPIAS JOSE MANUEL ARTUNDUAGA TAPIAS
DEMANDADOS	: PORVENIR S.A
LLAMADO EN GARANTIA	: BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-002-2021-00188-01
RADICADO INTERNO	: 187-22
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 26 de agosto de 2022 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 26 de agosto de 2022 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO